

DEPARTAMENTO TECNICO DE REVISION LEGISLATIVA

DETEREL 294/ 2010.

A la : Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos

Vía : **Lic. Mayra Ruiz de Astwood,**
Coordinadora de Comisiones Permanentes

De : **Welnel D. Félix F.**
Director Departamento Técnico de Revisión Legislativa

Asunto : Informe Proyecto de Ley Para la Administración y Disposición de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados en los Procesos Penales.

Referencia. : Oficio No. 001575 de fecha, 30 de agosto de 2010
(Exp. No. 07357)

En atención a su comunicación de referencia, en la que nos solicita realizar el correspondiente estudio y remitir la opinión sobre el proyecto de ley indicado en el asunto. Después de analizar dichos proyectos tenemos a bien expresarle lo siguiente:

Contenido de los Proyectos de Ley:

PRIMERO : Se trata de un Proyecto cuyo objetivo es regular la administración y destino de los bienes incautados, decomisados y abandonados en los procedimientos penales.

SEGUNDO: Dicho proyecto fue presentado por los señores Francisco Domínguez Brito y Francis Emilio Vargas, Senadores de la República por las Provincias Santiago y Puerto Plata respectivamente, en fecha 25 de agosto del año 2010.

Facultad Legislativa Congressional:

La facultad legislativa congressional para legislar en torno a esta materia está fundamentada en el Art. 93 literal q de la Constitución que enuncia lo siguiente:

“Art. 93 literal q : Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución.”

Procedimiento de Aprobación

En el caso de la especie, se trata de una ley ordinaria que por su naturaleza requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los votos presente cada cámara en virtud de lo que establece la Constitución de la República Dominicana en su artículo 113.

Desmante Legal

El Proyecto de Ley se fundamenta y toca las siguientes disposiciones legales:

1. La Constitución de la República.
2. Ley No. 78-03 de fecha, 15 de abril del 2003, sobre el Ministerio Público.
3. Ley No. 72-02 de fecha, 7 de junio de 2002 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones graves.
4. Ley No. 76-02 de fecha, 19 de junio del 2002, código Procesal Penal.
5. Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04, de fecha 28 de enero del 2004 y
6. El Plan de Seguridad Democrática elaborado por el Gobierno Nacional, así como los Lineamientos de Política Criminal elaborados por la Procuraduría General de la República.

Análisis Legal, Constitucional y de la Técnica Legislativa

Después de analizar el proyecto de Ley en los aspectos legal, constitucional y de técnica legislativa, **ENTENDEMOS** oportuno hacer las siguientes observaciones:

1. En cuanto al título del presente proyecto de ley recomendamos eliminar del mismo las palabras **“Proyecto de Ley”** en vista de que el título forma parte integral y definitivo del texto, y una vez aprobada y publicada deja de ser proyecto para convertirse en ley, en tal sentido y para asegurar la permanencia de la ley en el tiempo, recomendamos eliminar la expresión anterior para que en lo adelante diga como sigue:

***“ Ley Para la Administración y Disposición de Bienes
Incautados, Decomisados y Abandonados en los Procesos Penales.”***

2. Dada la naturaleza del presente proyecto de ley, el mismo se basó para su estructuración en la Constitución de la República Dominicana, por lo que sugerimos sea colocada en primer lugar para respetar el orden jerárquico de las leyes en la parte correspondiente a los Vistos.
3. Entendemos que el ordenamiento sistemático del presente proyecto no es el adecuado, pues establece la creación del órgano administrativo en los títulos finales atribuyéndole funciones en los primeros títulos, por lo que no existe una coherencia lógica en la disposición de las normativas y el contenido de sus artículos presentan disposiciones no homogéneas, provocando así inicialmente una poca comprensión del texto del proyecto; a partir de esto nos permitimos sugerir distribuir el articulado sobre la base de un nuevo ordenamiento sistemático lógico que contribuya a una mejor comprensión del texto legislativo en cuestión. Por ello sugerimos la disposición de los títulos, capítulos y secciones que contienen todo el conjunto de las informaciones de la siguiente manera:

**“TITULO I’
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DEL OBJETO Y DE LAS DEFINICIONES**

**TITULO II
DE LA DIRECCION GENERAL DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y
DECOMISADOS**

**TITULO III
DE LOS BIENES INCAUTADOS
CAPITULO I
PROCEDIMIENTO PARA LA INCAUTACION DE BIENES**

CAPITULO II
DE LA ADMINISTRACION Y DEPÓSITO DE BIENES INCAUTADOS
SECCION I
DE LOS BIENES MUEBLES

SECCION II
DE LOS BIENES INMUEBLES

SECCION III
DE LAS EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

CAPITULO III
DE LA UTILIZACION DE BIENES INCAUTADOS

CAPITULO IV
DE LA DEVOLUCION DE BIENES INCAUTADOS

CAPITULO V
DEL ABANDONO DE LOS BIENES INCAUTADOS

TITULO IV
DE LOS BIENES DECOMISADOS Y ABANDONADOS

CAPITULO I
DEL DESTINO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES”

4. El artículo 3 del proyecto trata sobre administración de los bienes incautados y quien será el órgano encargado de la administración de dichos bienes, más adelante, en el título IV, capítulo I, indica que el órgano administrador es la Dirección General de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados y establece en el artículo 56 como función principal la misma indicada en el artículo 3, en tal virtud, sugerimos la eliminación del artículo 3 del proyecto, con la finalidad de mantener un orden lógico en las disposiciones y tomando en cuenta que todas las normativas establecidas tienen fuerza de ley por lo que no tiene sentido que exista una normativa que indique el cumplimiento de las demás dispuestas en la ley.
5. Hemos notado que se menciona en el cuerpo normativo de nuestro proyecto de ley “**Dirección General de Custodia y Administración**”, y el nombre completo es “**Dirección General de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados**”, por lo que recomendamos que en el artículo 54 que trata sobre la creación de dicho órgano administrativo, se establezca como sigue:

“Artículo __.- Creación. Se crea la “Dirección General de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados” en lo adelante, “Dirección General de Custodia y Administración”, como órgano administrativo...”.

- 6.El artículo 7 del presente proyecto establece disposiciones distintas dentro de un mismo artículo, al respecto el Manual de Técnica Legislativa señala en su punto 4.1.7.2 que cada artículo debe contener una sola norma y cada norma debe de estar contenida íntegramente en el artículo, por lo que recomendamos establecer párrafos derivados de la norma principal, de esta manera el artículo 7 rezaría de la siguiente manera:

“Artículo __.- Procedimiento para las notificaciones. Las notificaciones a que se refiere esta ley se practican mediante ministerio de alguacil, en la forma prevista para los emplazamientos por el Código de Procedimiento Civil.

Párrafo I.- En los casos en que las notificaciones se hayan realizado mediante el procedimiento de domicilio desconocido, adicionalmente se debe efectuar un aviso en un diario de amplia circulación nacional por dos veces con intervalo de tres días entre cada publicación. Los avisos deberán contener un resumen del acta de incautación.

Párrafo II.- Las notificaciones personales surten efectos a partir del día en que hubieren sido practicadas, y las efectuadas mediante publicación, el día de la última publicación. Los plazos establecido en esta Ley, empezaran a correr el día siguiente a aquel en que haya surtido efecto la notificación respectiva.”

7. Con respecto al artículo 11, observamos y proponemos lo siguiente:

- a) No contiene epígrafe o un resumen del contenido del artículo.
- b) El artículo contiene dos normas diferentes por lo que es preciso independizarlas en artículos diferentes.
- c) La parte infine del artículo es contentivo de una norma establecida en el artículo 8, por lo que sugerimos eliminar las dos últimas líneas del artículo.

Luego de las sugerencias anteriores proponemos que el artículo 11 y siguiente se lean como sigue:

“Artículo __.- Etapas en la administración de Bienes Incautados. La administración de los bienes incautados comprende recepción, registro, custodia, conservación y supervisión.

Artículo __.- Conservación de los Bienes Incautados. Los bienes incautados deben ser conservados en el estado en que se hayan incautado, salvo el deterioro normal que se les cause por su naturaleza, por el transcurso del tiempo o por el uso institucional.”

8. Establecer la parte infine del artículo 15 como párrafo del mismo por tratarse de una norma supletoria, es así como el párrafo del artículo 15 se leerá de la siguiente forma:

“Párrafo.- En caso de que los bienes sean decomisados o abandonados se dispondrá de dichos fondos de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.”

9. En referencia al artículo 16 del proyecto de ley en cuestión, entendemos que procede colocar numerales para designar de manera individual las obligaciones del administrador de los bienes incautados, de esta forma damos una mayor claridad al texto normativo, es así como el artículo 16 se debe establecer como sigue:

“Artículo 16.- Obligaciones del administrador de los bienes incautados. *Las personas que sean designados como depositarios o administradores de bienes incautados que sean productivos tendrán las siguientes obligaciones:*

- 1) Organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas y financieras de los bienes bajo su responsabilidad incluida la enajenación de frutos o productos y extender en su caso recibos;*
- 2) Si son explotaciones agrícolas, industriales, mercantiles o de servicios efectuar las labores u operaciones que exija cada una de ellas;*
- 3) Entregar con oportunidad a la Dirección General de Custodia y Administración la información general requerida;*
- 4) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, así como los lineamientos que sean dictados por la autoridad competente conforme a la presente Ley;*
- 5) Recaudar oportunamente el importe de toda obligación;*
- 6) Efectuar un control interno sobre los compromisos, gastos y desembolsos;*
- 7) Llevar los correspondientes libros de contabilidad;*
- 8) Presentar informes periódicos a la Dirección General de Custodia y Administración sobre su administración;*

9) Remitir a la Dirección General de custodia y Administración los beneficios y excedentes recaudados;

10) Cumplir con todos los deberes que impone el Código Civil a los depositarios, así como la de empleador respecto al personal que requiera para el buen manejo del bien administrado y

11) Las demás que le señale la Dirección General de Custodia y Administración.”

10. El artículo 17, referente a los requisitos para ser depositarios – administrador, contiene tres normativas distintas y basándonos en los que nos indica la Técnica Legislativa acerca de que cada norma debe de estar contenida íntegramente en un artículo, sugerimos individualizar cada norma en artículos independientes y cambiar el epígrafe al artículo 17, de esta forma tendríamos como resultado del referente artículo las siguientes redacciones alternas:

“Artículo ____.- Designación del depositario – administrador. Pueden ser designados como depositario – administrador de bienes incautados personas físicas y jurídicas.

Artículo ____.- Requisitos para la designación de personas físicas. En caso de que se designe una persona física, deberá reunir los siguientes requisitos:

- 1) Ser mayor de 30 años de edad;
- 2) No tener antecedentes penales y
- 3) Acreditar aptitud y experiencia para el cargo.

Artículo ____.- Requisitos para la designación de personas jurídicas. Si el depositario-administrador designado fuera una persona jurídica deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que cumple con los demás requisitos exigidos por las leyes dominicanas para su funcionamiento.”

11. Los numerales 3) y 4) del artículo 48 contienen párrafos que no están correctamente designados, por lo que recomendamos lo siguiente:

- Que la segunda parte del numeral 3) se nombre con la palabra “Párrafo.-“ y en la primera línea, sustituir la referencia “párrafo anterior” por “numeral anterior”;
- En el numeral 4) nominar los párrafo como “párrafo I”, “párrafo II” y “Párrafo III”.

12. En el artículo 55 hemos observado lo siguiente:

- a) En primer lugar, el contenido de la normativa establece que el Director General y el Sub-Director General de la Dirección General de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados serán designados a través de un **concurso publico por un periodo de cuatro (4) años y como requisito señala que no debe tener antecedentes penales**, en ese sentido entendemos que ambas disposiciones son improcedentes, pues no sería justo que si es elegido por concurso publico se le imponga el factor tiempo, limitando el ejercicio de sus funciones a un periodo determinado, de ser así el concurso público no tendría sentido; de igual manera, no procede establecer como requisito para ejercer las funciones de Director General y Sub-Director de un organismo no tener antecedentes penales, pues el nuevo sistema correccional que en la actualidad se implementa de manera progresiva en la República Dominicana, lo que persigue es posibilitar a las personas privadas de libertad su adecuada reinserción en la sociedad, con voluntad y capacidad para respetar la ley.
- b) En segundo lugar, la disposición contiene dos normativas distintas, y tal como explicamos en numerales anteriores del presente informe, los artículos no deben de tener mas de una normativa en su contenido, por lo que en base a lo anterior, es preciso la conformación de dos artículo diferentes que encierren ambas normativas de manera independiente.

Luego de lo analizado en los literales a) y b) sugerimos las siguientes normativas alternas que encierran el contenido del artículo 55 de proyecto conjuntamente con los modificaciones :

*“**Artículo.- Director General.-** La Dirección General de custodia y Administración esta a cargo de un Director General y de un Sub-Director General, que serán escogidos mediante concurso público por el Consejo General de Procuradores.*”

Artículo.- Requisitos para la designación de Director General y Sub-Director General. Para ser Director General y Su-Director General de la Dirección general de Custodia y Administración se requiere:

- 1) Ser dominicano;
- 2) Licenciados en Administración de Empresas, Economista, Contabilidad o Auditoría;
- 3) Tener por lo menos treinta (30) años de edad.”

13. La Técnica Legislativa nos sugiere en cuanto a las disposiciones que contienen normativas intemporales, agruparlas dentro de un título llamado “Disposiciones Transitorias”, las cuales se colocaran dentro del texto legislativo fuera de la secuencia

numérica, por tratarse de una normativa que solo surtirá efecto por un periodo determinado de tiempo, a diferencia de las demás que serán parte del texto normativo de manera definitiva, por lo que sugerimos que el artículo del presente proyecto de ley sea colocado bajo esta denominación por tratarse de una normativa de este tipo y las derogaciones y entrada en vigencia de la ley deben establecerse dentro del título “Disposiciones Finales” y fuera, también, de la secuencia numérica del texto.

14. Hemos observado problemas de carácter técnico en cuanto a la manera de presentar los verbos, ahora bien, de acuerdo al punto 5.2 del Manual de Técnica Legislativa “**Formas Verbales**” el mismo establece que la norma en toda ley debe estar relacionada con el tiempo en que la misma entra en vigencia y se aplica, no con el que se elabora y se aprueba; siempre debemos preferir el modo indicativo al subjuntivo; el presente al futuro y utilizar el futuro sólo cuando es irreparable por el presente, por lo que basándonos en lo anterior recomendamos cambiar las formas verbales presente en el texto normativo siempre que proceda.

Finalmente, cabe indicar que algunos señalamientos de los sugeridos en la presente opinión han implicado la inclusión de nuevos artículos por lo que se ha producido un cambio sucesivo en la numeración de los mismos y en consecuencia, se debe prestar especial cuidado a las referencias internas dentro del proyecto, en tal virtud, sugerimos a la comisión encargada del presente proyecto de ley, abocarse a su estudio tomando en cuenta las sugerencias vertidas en el presente informe y la redacción alterna anexa al mismo.

Atentamente,

Lic. Welnel D. Feliz.
Director del Departamento
Técnico de Revisión Legislativa

**LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS
Y ABANDONADOS EN LOS PROCESOS PENALES**

CONSIDERANDO PRIMERO: Que uno de los aspectos fundamentales de la investigación penal lo constituye el relativo a la identificación, ubicación e incautación de los bienes o instrumentos utilizados para la comisión de las infracciones, así como los que sean el producto de actividades delictivas, para fines de su posterior decomiso;

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que en nuestra legislación no se encuentra reglamentada de forma general y detallada la administración, custodia, cuidado y disposición de bienes incautados con motivo de investigaciones y procesos penales;

CONSIDERANDO TERCERO: Que es necesario establecer un sistema coherente de administración y disposición de bienes incautados que posibilite la conservación material de dichos bienes o de su valor en el momento en que sea adoptada dicha medida procesal, mientras dure el proceso penal, así como utilizar sus frutos e intereses en los esfuerzos para la prevención y represión del delito;

CONSIDERANDO CUARTO: Que la Ley No. 78-03, de fecha 15 de abril del 2003 que contiene el Estatuto del Ministerio Público dispone que los miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional son responsables penal y civilmente de la custodia y cuidado de los bienes ocupados con motivo de las investigaciones penales, con la única excepción de las drogas y sustancias controladas cuya custodia debe ser mantenida en la forma establecida en la Ley 50-88, de fecha 30 de mayo del 1988;

CONSIDERANDO QUINTO: Que como consecuencia de la anterior disposición legal, la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados prevista en la Ley 72-02, de fecha 7 de junio del 2002 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras infracciones graves ha quedado sin objeto, por lo que resulta conveniente el inicio de un proceso coherente y organizado de traspaso de la custodia de los bienes incautados por infracciones a la señalada Ley al Ministerio Público.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana.

VISTA: La Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04, de fecha 28 de enero del 2004.

VISTA: La Ley No. 78-03, de fecha 15 de abril del 2003 contentivo al Ministerio Público.

VISTA: La Ley No. 72-02, de fecha 7 de junio del 2002 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.

VISTA: La Ley No. 76-02, de fecha 19 de junio del 2002 contentiva al Código Procesal Penal.

VISTA: El Plan de Seguridad Democrática elaborado por el Gobierno Nacional, así como los Lineamientos de Política Criminal elaborados por la Procuraduría General de la República.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DEL OBJETO Y DE LAS DEFINICIONES

Artículo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular la administración y destino de los bienes incautados, decomisados y abandonados en los procedimientos penales. La administración y destino de bienes incautados, decomisados y abandonados en otras materias, se regirán por las disposiciones legales que le resulten aplicables.

Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

- 1) Ministerio Público: El órgano del sistema de justicia definido en el Art. 6 de la Ley 78-03, del 15 de abril del 2003;
- 2) Dirección General de Custodia y Administración: El órgano dependiente de la Procuraduría General de la República, denominado Dirección General de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, previsto en el Título Cuarto de la presente Ley, y
- 3) Interesado: Persona que conforme a derecho, tenga interés jurídico sobre los bienes incautados, decomisados o abandonados.

TUTULO II

DE LA DIRECCION GENERAL DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS

Artículo 3.- Creación. Se crea la “Dirección General de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados”, en lo adelante “Dirección General de Custodia y Administración”, como un órgano administrativo del Ministerio Público, dependiente de la Procuraduría General de la República, el cual tiene por objeto la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados en los términos previstos en esta Ley.

Párrafo.- La Dirección General de Custodia y Administración tiene su oficina principal en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, y puede, con la previa aprobación del Consejo General de Procuradores, establecer dependencias a nivel nacional o regional para el buen desarrollo de sus fines.

Artículo 4.- Director General. La Dirección General de custodia y Administración esta a cargo de un Director General y de un Sub-Director General, que serán escogidos mediante concurso público por el Consejo General de Procuradores.

Artículo 5.- Requisitos para la designación de Director General y Sub-Director General. Para ser Director General y Su-Director General de la Dirección general de Custodia y Administración se requiere:

- 4) Ser dominicano;
- 5) Licenciados en Administración de Empresas, Economista, Contabilidad o Auditoria;
- 6) Tener por lo menos treinta (30) años de edad.”

Artículo 6.- Funciones. La Dirección General de Custodia y Administración tendrá las funciones siguientes:

- 1) Velar por la debida administración de los bienes incautados, así como procurar que los mismos no se alteren, deterioren, desaparezcan o destruyan;

- 2) Emitir, con la previa aprobación del Consejo General de Procuradores, acuerdos y lineamientos generales a los que deberán ajustarse los depositarios o administradores de bienes incautados;
- 3) Nombrar y remover depositarios o administradores con carácter provisional hasta tanto sean aprobados con carácter permanente por el Consejo General de Procuradores;
- 4) Solicitar, examinar y aprobar los informes generales o periódicos que deban rendir los depositarios o administradores, relacionados con la administración y manejo de los bienes incautados, así como sobre el desempeño de los depositarios o administradores que se hubieren designado;
- 5) Velar por la actualización permanente de la base de datos a que se refiere el artículo 10 de esta Ley;
- 6) Contratar, mediante procedimientos que garanticen publicidad y transparencia, pólizas de seguros que amparen los riesgos de los bienes incautados;
- 7) Realizar las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, para el pago de impuestos sobre los bienes objeto de administración.
- 8) Realizar periódicamente inspecciones oculares a los bienes administrados.
- 9) Informar, cuantas veces le sea solicitado, al Procurador General de la República, al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, así como a la autoridad judicial competente, respecto de los bienes sujetos a esta Ley.
- 10) Suscribir los contratos para la administración y arrendamiento de los bienes incautados. Y
- 11) Las demás funciones que se señalen en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 7.- Informe sobre los bienes incautados y su administración. La Dirección General de Custodia y Administración debe rendir un informe anual detallado al Procurador General de la

República, sobre los bienes incautados y su administración, de aquéllos que sean abandonados y decomisados, así como de las enajenaciones que haya realizado en los términos de esta Ley. Dicho informe deberá ser incluido, para su aprobación, en el informe que de la Cuenta Pública presente la Procuraduría General de la República, con el objeto de verificar si la Dirección General de Custodia y Administración realizó sus funciones de conformidad con lo previsto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, y se pondrá en su página Web.

Artículo 8.- Obligación de información. La Dirección General de Custodia y Administración esta obligada a informar, periódicamente, al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, el destino dado a los bienes incautados con motivo de procesos penales seguidos por violación a la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, así como de cualquier cambio que en el curso de la medida precautoria afecte a estos bienes.

TITULO III
DE LOS BIENES INCAUTADOS
CAPITULO I
PROCEDIMIENTO PARA LA INCAUTACION DE BIENES

Artículo 9.- Incautación, decomiso y destrucción de bienes. La incautación, decomiso y destrucción de bienes esta sujeta a lo dispuesto en el Código Penal, en el Código Procesal Penal y en Leyes Especiales. El Ministerio Público, con la previa autorización de la autoridad judicial

Artículo 11.- Notificación de la incautación. El Ministerio Público que practique la incautación, debe notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los treinta días siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, para que ejerza su derecho de audiencia. En dicha notificación se advertirá al interesado o a su representante legal para que no enajene o grave los bienes incautados. En la notificación deberá advertirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 56 de esta Ley, los bienes causarán abandono en favor del Estado.

Artículo 12.- Procedimiento para las notificaciones. Las notificaciones a que se refiere esta ley se practican mediante ministerio de alguacil, en la forma prevista para los emplazamientos por el Código de Procedimiento Civil.

Párrafo I.- En los casos en que las notificaciones se hayan realizado mediante el procedimiento de domicilio desconocido, adicionalmente se debe efectuar un aviso en un diario de amplia circulación nacional por dos veces con intervalo de tres días entre cada publicación. Los avisos deberán contener un resumen del acta de incautación.

Párrafo II.- Las notificaciones personales surten efectos a partir del día en que hubieren sido practicadas, y las efectuadas mediante publicación, el día de la última publicación. Los plazos establecido en esta Ley, empezaran a correr el día siguiente a aquel en que haya surtido efecto la notificación respectiva.”

Artículo 13.- Prohibición de enajenación. Los bienes incautados no puede ser enajenados o gravados por sus propietarios, depositarios o administradores, durante el tiempo que dure la incautación en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por esta Ley u otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 14.- Gravámenes. La incautación no implica modificación alguna a los gravámenes existentes con anterioridad sobre los bienes si estos han sido consentidos de buena fé por el acreedor. En estos casos la Dirección General de Custodia y Administración puede realizar el pago de la deuda que afecte al bien, subrogándose en los derechos del acreedor pagado.

Artículo 15.- Base de datos informatizada. La Dirección General de Custodia y Administración integrará una base de datos informatizada con el registro de los bienes incautados, abandonados y decomisados, que debe ser consultada por la autoridad judicial, el Ministerio Público y en general por cualquier persona interesada.

CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACION Y DEPÓSITO DE BIENES INCAUTADOS

Artículo 16.- Etapas en la administración de Bienes Incautados. La administración de los bienes incautados comprende recepción, registro, custodia, conservación y supervisión.

Artículo 17.- Conservación de los Bienes Incautados. Los bienes incautados deben ser conservados en el estado en que se hayan incautado, salvo el deterioro normal que se les cause por su naturaleza, por el transcurso del tiempo o por el uso institucional.”

Artículo 18.- Administración de los bienes incautados. La Dirección General de Custodia y Administración puede administrar directamente los bienes incautados, nombrar depositarios o administradores de los mismos o consentir arrendamientos.

Párrafo.- Quienes reciban bienes incautados en depósito o administración, están obligados a rendir a la Dirección General de Custodia y Administración un informe periódico sobre los mismos, y a darle todas las facilidades para su supervisión y vigilancia conforme lo determine la reglamentación.

Artículo 19.- Constancia en los registros públicos. Se hace constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables:

- 1) La incautación de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, vehículos, empresas o establecimientos comerciales, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia, y
- 2) El nombramiento del depositario o administrador, de los bienes a que se refiere el numeral anterior.

Párrafo.- El registro o su cancelación se debe realizar sin más requisito que el oficio del ministerio público.

Artículo 20.- Seguro para los bienes incautados. La Dirección General de Custodia y Administración debe contratar seguros para el caso de pérdida o daño de los bienes incautados.

Artículo 21.- Tratamiento de los frutos o rendimientos de los bienes. A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo de la incautación, se les dará el mismo tratamiento que a los bienes incautados que los generen. En todo caso, los recursos que se obtengan de la administración de los bienes incautados se destinarán a resarcir el costo de mantenimiento y administración de los mismos, cobertura de póliza de seguro, y el remanente, si lo hubiera, se mantendrá en un fondo que se entregará a quien en su momento acredite tener derecho.

Párrafo.- En caso de que los bienes sean decomisados o abandonados, se dispondrá de dichos fondos de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 22.- Obligaciones del administrador de los bienes incautados. Las personas que sean designados como depositarios o administradores de bienes incautados que sean productivos tendrán las siguientes obligaciones:

- 1) Organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas y financieras de los bienes bajo su responsabilidad incluida la enajenación de frutos o productos y extender en su caso recibos;
- 2) Si son explotaciones agrícolas, industriales, mercantiles o de servicios efectuar las labores u operaciones que exija cada una de ellas;
- 3) Entregar con oportunidad a la Dirección General de Custodia y Administración la información general requerida;
- 4) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, asíh como los lineamientos que sean dictados por la autoridad competente conforme a la presente Ley;
- 5) Recaudar oportunamente el importe de toda obligación;
- 6) Efectuar un control interno sobre los compromisos, gastos y desembolsos;
- 7) Llevar los correspondientes libros de contabilidad;

- 8) Presentar informes periódicos a la Dirección General de Custodia y Administración sobre su administración;
- 9) Remitir a la Dirección General de custodia y Administración los beneficios y excedentes recaudados;
- 10) Cumplir con todos los deberes que impone el Código Civil a los depositarios, así como la de empleador respecto al personal que requiera para el buen manejo del bien administrado y
- 11) Las demás que le señale la Dirección General de Custodia y Administración.

Artículo 23.- Designación del depositario – administrador. Pueden ser designados como depositario – administrador de bienes incautados personas físicas y jurídicas.

Artículo 24.- Requisitos para la designación de personas físicas. En caso de que se designe una persona física, debe reunir los siguientes requisitos:

- 4) Ser mayor de 30 años de edad;
- 5) No tener antecedentes penales y
- 6) Acreditar aptitud y experiencia para el cargo.

Artículo 25.- Requisitos para la designación de personas jurídicas. Si el depositario-administrador designado fuera una persona jurídica debe acreditar que se encuentra al día en el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que cumple con los demás requisitos exigidos por las leyes dominicanas para su funcionamiento.

Artículo 26.- Prohibiciones para ser depositario-administrador. No puede ser depositario-administrador de bienes incautados: quien fuere cónyuge o pariente del encausado dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que el bien incautado sea la vivienda familiar; la persona a quien se le aprehendió o incautó el bien inmueble objeto de administración; quien personalmente o como representante de personas jurídicas tuviere contratos con el encausado; por cualquier causa, tuviere interés personal o económico en el giro de la administración; quienes estuvieren impedidos de contratar de conformidad a la Ley; y quienes sean parientes de un miembro del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, del Ministerio Público o del Director o Encargado de la Dirección hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 27.- Obligaciones de los depositarios o administradores. Los depositarios o administradores de bienes incautados, así como los arrendatarios, estarán obligados a brindar todas las facilidades para que la autoridad judicial, el Ministerio Público o la Dirección General de Bienes Incautados, cuando así lo requieran, practiquen a dichos bienes las diligencias del procedimiento penal necesarias, o inspeccionar el estado en que se encuentran.

Artículo 28. Devolución de los bienes incautados. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, los bienes incautados serán devueltos a quien tenga derecho a ello, siempre y cuando no se haya declarado el abandono. En caso de que se ejerza la acción penal, los bienes incautados quedarán a disposición de la autoridad judicial, para los efectos del proceso. Siempre y cuando no se haya declarado el abandono, plazos para el abandono y no ejercicio de la acción penal.

SECCION I

DELOS BIENES MUEBLES

Artículo 29.- Custodia y conservación. Los bienes muebles incautados deben ser custodiados y conservados en los lugares que determine la Dirección General de Custodia y Administración, salvo lo dispuesto para determinados tipos de bienes en esta Ley.

Artículo 30.- Incautación de moneda nacional o extranjera. La moneda nacional o extranjera que se incaute, debe depositarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes en cuenta

especializada a nombre de la Dirección General de Custodia y Administración e invertidas en instrumentos de inversión financiera de alto rendimiento emitidos por el Banco de Reservas de la República Dominicana y/o del Banco Central de la República Dominicana.

Artículo 31.- Conservación para fines del proceso penal. En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario conservar para fines del proceso penal, el Ministerio Público así lo indicará a la Dirección General de Custodia y Administración para que éste los guarde y conserve en el estado en que los reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses.

Artículo 32.- Incautación de instrumentos de inversión financiera. Cuando los bienes incautados consistan en instrumentos de inversión financiera, tales como Libretas de Ahorros, Cuentas de Cheques, Certificados de Depósitos, Certificados Financieros, Contratos de Participación en Hipotecas Aseguradas, Bonos, Obligaciones, Títulos Valores, entre otros instrumentos de inversión, la Dirección General de Custodia y Administración solicitará a las entidades financieras o bursátiles que lo hayan emitido que procedan a su cancelación al vencimiento de los mismos, en los casos en que estos instrumentos no sean a la vista, y transfieran su producto para fines de ser depositados e invertidos en la forma prevista en el artículo 30.

Artículo 33.- Custodia a cargo de la Policía Nacional. Cuando los bienes incautados por el Ministerio Público consistan en armas de fuego, municiones, explosivos o pertrechos militares y policiales que no sean necesarios como medio de prueba para la presentación de cargos, la custodia estará a cargo de la Policía Nacional conforme a los mecanismos establecidos por el Ministerio de Interior y Policía. En caso de que las armas de fuego, municiones y explosivos hubieren sido utilizados en la comisión de una infracción penal serán remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) a fin de realizar los experticios correspondientes y posteriormente remitidas al Ministerio de Interior y Policía de acuerdo con el procedimiento establecido, quedando siempre a disposición del ministerio público para los fines del proceso penal.

Párrafo I.- Tratándose de narcóticos y sustancias controladas se procederá en los términos de la Ley No. 50-88, del 30 de mayo de 1988 y sus modificaciones.

Párrafo II.- En ambos casos se respetarán las normas establecidas por el Ministerio Público respecto a la cadena de custodia.

Artículo 34.- Custodia a cargo de la Fuerza Aérea Dominicana y la Marina de Guerra. Los aviones, avionetas, helicópteros y material de vuelo, incautados por el Ministerio Público serán confiados por la Dirección General de Custodia y Administración en uso exclusivamente institucional a la Fuerza Aérea Dominicana. Por su parte, las embarcaciones fluviales, lacustre y material de navegación serán confiadas exclusivamente en uso institucional a la Marina de Guerra.

Párrafo.- La Fuerza Aérea Dominicana y la Marina de Guerra quedaran obligadas a un adecuado cuidado y mantenimiento de estos bienes, debiendo elevar a la Dirección General de Custodia y

Administración informes trimestrales sobre su estado de conservación y el uso que se les hubiere dado, quien además podrá supervisar el estado de los mismos.

Artículo 35.- Incautación de especies de flora y fauna. Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se incauten, son provistas de los cuidados necesarios y entregados por la Dirección General de Custodia y Administración a zoológicos, acuarios o en instituciones análogas, considerando la opinión de la Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 36.- Incautación de obras de arte, arqueológicas o históricas. Las obras de arte, arqueológicas o históricas que se incauten, serán provistas de los cuidados necesarios y depositados por la Dirección en museos, centros o instituciones culturales públicas, considerando la opinión del Ministerio de Cultura.

Artículo 37.- Custodia a cargo del Banco Central de la República. Las piedras y metales preciosos incautados deben ser custodiados y cuidados en el Banco Central de la República Dominicana.

Artículo 38.- Custodia de los bienes semovientes, fungibles y perecederos. Los bienes semovientes, fungibles y los perecederos, así como aquellos bienes que sean de mantenimiento incosteable o puedan depreciarse conforme al Código Tributario, como los automotores, así como también las obras de arte, son enajenados por la Dirección General de Custodia y Administración de acuerdo con los procedimientos previstos en el Reglamento que al efecto dicte el Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo General de Procuradores.

Artículo 39.- Destino del producto de la enajenación. El producto que se obtenga de la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo anterior debe ser depositado a nombre de la

Dirección General de Custodia y Administración en cuenta especializada en el Banco de Reservas de la República Dominicana o en el Banco Central de la República.

SECCION II

DE LOS BIENES INMUEBLES

Artículo 40. Incautación de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que se incauten pueden quedar depositados con alguno de sus ocupantes o arrendatarios. Si el bien inmueble incautado constituye una dependencia del dominio público nacional o municipal se le restituirá al Estado o al Municipio, según sea el caso. En todo caso, se respetarán los derechos legítimos de terceros de buena fe.

Artículo 41.- Administración a cargo del Ministerio de Agricultura. Los inmuebles incautados susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, son administrados a fin de mantenerlos productivos por la Ministerio de Agricultura o dados en arrendamiento a terceros. Asimismo, los inmuebles incautados que sean susceptibles de ser arrendados para fines de vivienda familiar o para instalación de empresas o establecimientos comerciales podrán ser arrendados. El reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos de transparencia y publicidad en base a los cuales será seleccionado el arrendatario o inquilino.

Artículo 42.- Vigencia del contrato de arrendamiento. En caso de que por sentencia judicial con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada se dispusiere el decomiso o la devolución del bien consentido en arrendamiento por la Dirección General de Custodia y Administración, el contrato continuará vigente hasta el vencimiento del plazo pactado, sin perjuicio de las previsiones sobre terminación anticipada previstas en el respectivo contrato o en el Código Civil. En caso de proceder

la devolución física del bien se entenderá cumplida esta obligación con la cesión del contrato de arrendamiento al titular del derecho respectivo.

Artículo 43.- Procedimiento para la enajenación de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles incautados, podrán ser enajenados por la Dirección General de Custodia y Administración de acuerdo con los procedimientos previstos en el Reglamento que al efecto dicte el Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo General de Procuradores.

SECCIÓN III

DE LAS EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Artículo 44.- Administrador para las empresas. La Dirección General de Custodia y Administración debe nombrar un administrador para las empresas o establecimientos comerciales que se incauten, de conformidad a lo establecido en esta ley.

Artículo 45.- Cierre o suspensión de actividades de empresas. La incautación no debe ser causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas o establecimientos con actividades lícitas. El administrador tendrá las facultades necesarias, en términos de las disposiciones aplicables, para mantenerlos en operación y buena marcha del negocio, pero no podrá enajenar ni gravar los bienes que constituyan parte del activo fijo de la empresa o establecimiento.

Párrafo.- La Dirección General de Custodia y Administración, con la previa autorización del Consejo General de Procuradores, podrá autorizar al administrador que proceda a la suspensión o cierre definitivo de las empresas o establecimientos comerciales cuando las actividades de éstos resulten incosteables.

Artículo 46.- Independencia del administrador. El administrador tiene independencia respecto al propietario, los órganos de administración, asambleas de accionistas, de socios o de partícipes, así como de cualquier otro órgano de las empresas o establecimientos incautados, ya que a partir de la incautación cesan las facultades del propietario, y de los órganos de administración y dirección de la sociedad o de la unidad de explotación económica. Responderá de su actuación únicamente ante la Dirección General de Custodia y Administración.

CAPITULO III DE LA UTILIZACION DE LOS BIENES INCAUTADOS

Artículo 47.- Uso de los bienes incautados. Los bienes incautados sólo podrán ser utilizados en los casos y formas previstas expresamente en esta Ley.

Artículo 48.- Devolución de bienes. Cuando proceda la devolución de bienes que se hayan utilizado conforme al artículo anterior, el depositario o arrendatario será responsable por los daños ocasionados por su mal uso. El seguro correspondiente a estos bienes deberá cubrir los daños derivados del uso institucional de los mismos.

Artículo 49.- Intereses de los instrumentos de inversión. Los intereses que generen los instrumentos de inversión que se constituyan en el Banco de Reservas de la República o en el Banco Central, con motivo de la incautación de moneda nacional o extranjera o de embargo preventivo o congelamiento de instrumentos de inversión en entidades de intermediación financiera o bursátil, así como los originados en la enajenación de bienes incautados, y las sumas que sean el

producto de la administración o arrendamiento de dichos bienes, deben ser distribuidos de la siguiente manera:

- 1) Si se trata de depósitos cuyos fondos se originen en la incautación de instrumentos financieros de inversión o de moneda nacional o extranjera con motivo de investigaciones penales relativos a los delitos previstos en la Ley sobre Lavado de Activos, cuando estos provengan exclusivamente del tráfico ilícito de drogas, los intereses generados serán destinados a financiar necesidades logísticas y operativas en materia de persecución del narcotráfico, programas o instrumentos de prevención de drogas dentro de la estrategia contenida en el Plan Nacional de Drogas, así como necesidades logísticas y operativas de la Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos, en partes iguales;
- 2) En caso de depósitos cuyos fondos se originen en la enajenación de bienes incautados previstos en la ley sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves, los intereses generados deben ser distribuidos conforme lo dispone la ley señalada, La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas solo puede destinar estos recursos a programas específicos, previamente aprobados por sus Juntas Directivas, y en ningún caso para cubrir cargas fijas.
- 3) Cuando los depósitos se originen en fondos incautados con motivo de infracciones penales distintas de las previstas en los numerales anteriores, los recursos serán destinados para financiar las actividades de persecución del Ministerio Público.

CAPÍTULO I

DE LA DEVOLUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS

Artículo 50.- Devolución de bienes incautados. La devolución de bienes incautados procede en los casos siguientes:

- 1) En la fase del procedimiento preparatorio, cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, o se levante la incautación, de conformidad con las disposiciones aplicables, y
- 2) Durante el proceso penal, cuando la autoridad judicial no disponga el decomiso o levante la incautación, siempre y cuando esta decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 51.- Procedimiento para la devolución de bienes incautados. Cuando proceda la devolución de bienes incautados, quedarán a disposición de quien tenga legalmente derecho a ellos. La autoridad judicial o el Ministerio Público notificará su resolución al interesado o a su representante legal dentro de los treinta días siguientes, para que en el plazo de tres meses a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo intimación de que de no hacerlo se declararán abandonados. Si se ha hecho constar la incautación de los bienes en los registros públicos, la autoridad judicial o el Ministerio Público ordenará su cancelación o levantamiento.

Artículo 52.- Obligaciones de la Dirección General de Custodia y Administración. La Dirección General de Custodia y Administración, al momento en que el interesado o su representante legal se presenten a recoger los bienes, deberá:

- 1) Levantar acta en la que se haga constar el derecho del interesado o de su representante legal a recibir los bienes, debiendo ser firmada por quien recibe en señal de conformidad;
- 2) Realizar un inventario de los bienes;

- 3) Entregar los bienes al interesado o a su representante legal; y
- 4) Remitir copia del acta levantada al ministerio público encargado de la investigación.

Artículo 53.- Devolución en caso de enajenación. Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido previamente enajenados de conformidad a esta Ley, o la Dirección General de Custodia y Administración se encuentre en la imposibilidad de devolverlos, por pérdida u otra razón de fuerza mayor, dicha devolución se tendrá por cumplida entregando el valor en que fue adjudicado, o el valor de los bienes al realizarse la incautación en los demás casos.

CAPITULO II

DEL ABANDONO DE LOS BIENES INCAUTADOS

Artículo 54.- Abandono de los bienes incautados. Los bienes incautados respecto de los cuales el interesado o su representante legal no hayan manifestado lo que a su derecho convenga, causarán abandono en provecho del Estado, en los plazos siguientes:

- 1) Cuando se trate de bienes muebles, transcurridos seis meses, contados a partir de la notificación de su incautación, y
- 2) Cuando se trate de bienes inmuebles, transcurrido un año, contado a partir de la notificación de su incautación.

Artículo 55.- Declaración de abandono. La Dirección General de Custodia y Administración debe notificar al interesado o a su representante legal el vencimiento de los plazos previstos en el artículo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley, para que en el plazo de tres meses a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo intimación de que de no hacerlo, los bienes se declararán abandonados.

Artículo 56.- Procedimiento para la declaración de abandono. La Dirección General de Custodia y Administración procede a declarar abandonados los bienes incautados conforme a las reglas siguientes:

- 1) Solicitar al Ministerio Público que corresponda, el informe en el que se haga constar que el interesado o su representante legal no se presentaron a recoger los bienes o a hacer reclamo alguno;

- 3) Transcurridos los plazos previstos en los artículos 49, 53 y 44 de esta Ley, la Dirección General de Custodia y Administración lo notificará al interesado o a su representante legal

en los términos del artículo 12 de este ordenamiento, y lo intimará para que, de no manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los treinta días siguientes a la notificación, los bienes serán declarados abandonados;

- 4) Concluido el plazo de treinta días a que se refiere el numeral anterior, sin que el interesado o su representante legal manifiesten lo que a su derecho convenga, la Dirección General de Custodia y Administración declarará que los bienes han causado abandono a favor del Estado. A partir de dicha declaración, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 49 esta Ley.

Si dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se presenta el interesado o su representante legal a recoger los bienes sobre los que, previamente se haya resuelto su devolución en los términos de esta Ley, se le devolverán previo acuse de recibo y sin más trámite.

- 5) Una vez declarado el abandono, la Dirección General de Custodia y Administración deberá requerir la ratificación de la declaración de abandono efectuada en los términos antes señalados, por ante el juez de la instrucción competente durante el proceso de la investigación.

Párrafo I.- Para la ratificación, la autoridad judicial únicamente deberá verificar que las notificaciones previstas en esta ley se hayan realizado correctamente, que transcurrieron los plazos correspondientes, y que se le exhibió constancia del Ministerio Público de que no recibieron del interesado o de su representante legal reclamo alguno.

Párrafo II.- La autoridad judicial señalada deberá ratificar la declaración de abandono en un plazo que no excederá de quince días laborables computados a partir del día siguiente en que la Dirección General de Custodia y Administración lo haya requerido.

Párrafo III.- En el supuesto de que la autoridad judicial referida considere que alguna notificación a que se refiere el segundo párrafo de este numeral no fue practicada conforme a esta Ley, ordenará que se reponga el procedimiento a partir de la notificación hecha incorrectamente.

TITULO IV
DE LOS BIENES DECOMISADOS Y ABANDONADOS
CAPITULO I
DEL DESTINO

Artículo 57.- Decomiso de bienes. La autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá ordenar el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de esta Ley.

Artículo 58.- Bienes que pasan a la propiedad del Estado. Los bienes decomisados y los abandonados, sus frutos y productos, así como los derivados de su enajenación, deben pasar a la propiedad del Estado. Aquéllos distintos al numerario podrán ser enajenados siguiendo los procedimientos previstos para los bienes del Estado por la Constitución y las Leyes.

Artículo 59.- Destino de los bienes decomisados. El producto de los bienes decomisado a que se refiere el artículo anterior, una vez descontados los costos de administración, mantenimiento y conservación incurridos por la Dirección General de Custodia y Administración, se destinarán de la siguiente manera:

- 1) Si se trata del producto de la enajenación de bienes decomisados o abandonados con motivos de investigaciones o procesos penales relativos a los delitos previstos en la Ley

sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, así como de una infracción a la Ley sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, cuando estos provengan exclusivamente del tráfico de drogas y sustancias controladas, los mismos deben ser distribuidos en la forma prevista por dicha Ley;

- 2) Cuando el producto de la enajenación se originen en bienes decomisados o abandonados con motivo de infracciones penales distintas de las previstas en el numeral anterior, los recursos serán destinados para la capacitación y equipamiento del Ministerio Público y de sus Unidades Técnicas.

Artículo 60.- Excepciones. Como excepción a lo dispuesto en los artículos 49 y 50, el Poder Ejecutivo puede acordar, según la naturaleza de los bienes, que en lugar de su enajenación sean destinados al Ministerio Público, a las dependencias o entidades de la Administración Pública, o bien se entreguen a instituciones de beneficencia, de investigación científica u otras análogas, según sus necesidades. En todo caso, los bienes que los organismos públicos, vengán utilizando de

conformidad con el artículo 44 de la presente Ley, se le pueden asignar en destino, para que continúen utilizándolos en el desarrollo de sus funciones

Artículo 61.- Colaboración de autoridades de otros países. Cuando autoridades de otros países, hubieren colaborado en investigaciones cuya consecuencia haya sido el decomiso de bienes, éstos y el producto de su enajenación, podrán compartirse con dichas autoridades, de conformidad con lo que dispongan los convenios, tratados, acuerdos internacionales y demás disposiciones aplicables.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

UNICO.- Conservación de bienes a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público conservará en depósito, bajo su responsabilidad y con las obligaciones a que se refiere la presente Ley, los bienes incautados que se encuentren en su custodia a la entrada en vigor de esta Ley. Dichos bienes serán inventariados y entregados a la Dirección General de Custodia y Administración, en un plazo no mayor de seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Derogaciones.- Se derogan los artículos 16, letra i), de la Ley 78-03, del 15 de abril de 2003, así como los párrafos I y II del artículo 10, y los artículos 14, 15, 16, 17, 35, 36, 58, 59 y 60 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.

Modificaciones. Se modifica el artículo 49 de la Ley 78-03, del 15 de abril de 2003, a fin de que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

“Artículo 49.- También estarán bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República, las instituciones siguientes:

- 1) La Dirección General de Prisiones, cuyas funciones están determinadas por la Ley 224, del 26 de junio del año 1984, que establece el Régimen Penitenciario, y por los reglamentos dictados al efecto;
- 2) La Dirección General de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, cuyas funciones están previstas en la Ley para la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, y por los reglamentos dictados al efecto;
- 3) Dirección Nacional de Persecución contra la Corrupción Administrativa;
- 4) Escuela Nacional del Ministerio Público;
- 5) Dirección Nacional del Ministerio Público;
- 6) Unidad de Familia y Menores;
- 7) Unidad del Ministerio Público Anti lavado de Activos.

Modificaciones. Se modifica el artículo 10, y sus tres párrafos, de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, para que en lo sucesivo se lean de la siguiente manera:

Artículo 10.- Los bienes, fondos e instrumentos incautados o inmovilizados en manos de un sujeto obligado serán transferidos, a solicitud del Ministerio Público, a la Dirección General de Custodia y Administración a fin de que esta proceda en la forma establecida en el artículo 22 de la Ley para la Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Párrafo I.- La Autoridad Judicial competente, los agentes o miembros de los organismos investigativos que intervengan en el proceso de incautación, que dispongan de bienes o fondos incautados o retengan éstos para su uso personal o de terceros, se les aplicarán las penas establecidas en el artículo 18 de esta ley.

Párrafo II.- En relación con los bienes que hayan sido incautados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se procederá a realizar la notificación en los términos establecidos en la presente Ley. Dichos bienes causarán abandono a favor del Estado, una vez transcurridos los plazos a que se refieren los artículos 41, 45, 46 y 47 de esta Ley, contados a partir de la fecha de su entrada en vigor. Para estos efectos, la Dirección General de Custodia y Administración procederá en los términos establecidos en esta Ley.

Entrada en Vigencia.- La presente ley entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación.-

DADA...